

Señor (a)

**JUEZ DIECIOCHO (18) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**

E.

S.

D.

**ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN**

**DEMANDANTE:** FINESA S.A.

**DEMANDADO:** RICARDO ESCOBAR ALONSO

**RAD: DECLARATIVO ABREVIADO - 11001400301820180124800**

**JUAN DIEGO DIAVANERA TOVAR**, abogado en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderado judicial de la parte demanda en el proceso de la referencia, encontrándome dentro del término de ley, interpongo recurso de reposición contra la providencia de fecha 07 de octubre de 2021, notificada el día 08 de octubre de 2021, por las siguientes razones:

El Despacho mediante la providencia impugnada, resolvió negar la nulidad propuesta por Ricardo Escobar Alonso y Luz Ángela Ávila González en razón de:

1. Se tiene que el trámite de pago directo se trata de un requerimiento o diligencia, sin que medie proceso judicial alguno, pues fueron las partes quienes en ejercicio de la autonomía de la voluntad pactaron el procedimiento extrajudicial en caso de incumplimiento del deudor.
2. No resulta aplicable la suspensión de que trata el artículo 545 del C.G.P. pues el trámite de pago directo es eminentemente extrajudicial, limitándose la actuación del juez a verificar los presupuestos normativos y librar la orden de aprehensión sobre el bien.
3. Considera que es ante el Juez del concurso a quien le corresponde determinar si ordena la suspensión de procedimiento de pago directo adelantado por el acreedor prendario y la integración del bien dado en garantía a la masa de la liquidación.

Frente a lo anterior el despacho no se pronuncia frente a la argumentación planteada en la nulidad por parte del suscrito, aludiendo que la Corte Constitucional frente a este asunto se ha referido en Sentencia C-447 de 2015 de la siguiente manera (negrilla y resaltado fuera de texto original):

*“En el ordenamiento jurídico colombiano hay varios regímenes de insolvencia: (i) el general, que se aplica a “las personas naturales comerciantes y a las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto” y a “las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales”, y (ii) el especial, que se aplica a “la persona natural no comerciante”. A pesar de que el Capítulo II del Título V de la Ley 1676 de 2013, en el que está el artículo 52, que contiene la expresión demandada, alude de manera general a las garantías en los procesos de insolvencia, lo que en principio podría incluir la insolvencia de la persona no comerciante, **una interpretación sistemática de las normas de este capítulo, en especial de los artículos 50, 51 y del parágrafo del artículo 52, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 sobre el ámbito de aplicación de la ley, permite concluir que este último artículo sólo se aplica al régimen de insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006.**”.*

El Juzgado no realiza un análisis jurídico suficiente del porque su interpretación del artículo 52 (Ley 1676 de 2013) es diferente a la realizada por la Corte Constitucional en Sentencia C-447 de 2015, donde la Corte se tomó el trabajo de realizar una interpretación sistemática fundada en el régimen de insolvencia en su conjunto, y en cambio su interpretación se evidencia exegética o literal.

De igual forma, ha de tenerse en cuenta que los regímenes de insolvencia contemplados en la ley 1116 de 2006 y el de Persona Natural no comerciante tienen reglas aplicables completamente diferentes de acuerdo a los fines contemplados en cada ley, siendo así no puede olvidarse que el objetivo del régimen insolvencia de persona natural no comerciante es *“concebir como una herramienta que apunta a plantear un mecanismo expedito y sencillo para el deudor no comerciante de superar su crisis económica”*.<sup>1</sup>

Tratándose de personas en estado de vulnerabilidad manifiesta por su situación de crisis económica, el objetivo de la ley de Insolvencia es atender el principio constitucional de solidaridad,<sup>2</sup> señalando que la dignidad humana debe ser priorizado sobre el derecho de crédito de los acreedores, e incluso establece una prelación normativa expresa en el artículo 576 del Código General del Proceso: *“Las normas establecidas en el presente título prevalecerán sobre cualquier otra norma que le sea contraria, incluso las de carácter tributario”*.

---

<sup>1</sup> Congreso de la República de Colombia, Gaceta 912/09, pg 5

<sup>2</sup> Pag 41 y siguientes del Régimen de Insolvencia De la Persona Natural No Comerciante. Juan José Rodríguez Espitia. Universidad Externado de Colombia.

## PETICION

Por lo anteriormente explicado, solicito al señor Juez se sirva revocar el auto que niega la nulidad alegada por los demandados y tenga en cuenta las disposiciones legales, los fines del Régimen de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante y los criterios auxiliares de interpretación de la Corte Constitucional y proceda a decretar la nulidad alegada.

De sus amables consideraciones,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Diego Diavanera Tovar', with a long horizontal flourish extending to the right.

**JUAN DIEGO DIAVANERA TOVAR**

C.C. No. 80.815.915 de Bogotá

T.P. No. 175.137 del C. S de la J.